

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veinticinco.

Proveyendo al escrito folio 11: estese al mérito de la constancia de folio 7.

VISTOS:

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de 13 de marzo pasado, procedió –en lo que interesa- a condenar a **MIGUEL ANGEL STENGER LEDESMA**, a sufrir la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio más las accesorias legales de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena y a una multa de un tercio (1/3) de unidad tributaria mensual como autor del delito consumado de Hurto del artículo 446 N° 2 del Código Penal, ocurrido el día 19 de diciembre de 2023, en la tienda Paris del mall Parque Arauco de la comuna de Las Condes.

Se le tuvo por cumplida la pena de multa por el día de abono que tiene por esa causa conforme certificación de la jefe de Unidad de Causa del Tribunal María Eugenia Becerra Fuenzalida.

Por reunir los requisitos previstos en el artículo 4° de la Ley 18.216, se le concedió la pena sustitutiva de remisión condicional por el lapso de la condena –quinientos cuarenta y un días- periodo en el cual deberá someterse al cumplimiento de las exigencias de la citada ley, sin que se le impusiere en el fallo el pago de las costas del procedimiento.

En contra del anterior fallo, la defensa privada dedujo recurso de nulidad en representación del sentenciado, esgrimiendo como única causal, la del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por haberse incurrido en una infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ello por estimar que los elementos acreditados en el juicio oral no permitían imponer la sanción fijada, al no reconocerse la minorante de irreprochable conducta anterior, valorando negativamente la existencia de procesos en contra del acusado cuando era adolescente, lo que no está permitido.

El libelo anulatorio fue declarado por esta Corte admisible, fijándose la audiencia del día 6 de mayo en curso para llevar a cabo su conocimiento en esta Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que se cumplió conforme al mérito del acta que se acompaña, cuyo respectivo registro de audio da debida cuenta de su realización, con



la concurrencia y alegatos de los abogados que en el registro de audio se individualizan, siendo que, luego de la vista del recurso, se citó en la misma a los intervinientes a la lectura del fallo ordenada para el día de hoy.

Finalmente, debe dejarse debida constancia que al momento de llevarse a cabo la audiencia para el conocimiento del recurso no se ofreció prueba por ninguna de las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el recurso de nulidad intentado, se invocó como única causal la referida a la inexacta aplicación del derecho que habría influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, contenida en el **artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal**, denunciando como normas infringidas los artículos 1 y 4 de la Ley N° 18.216 y el artículo 66, inciso tercero, del Código Penal.

SEGUNDO: Que, la censura, como se advirtió, se centra en haberse aplicado una pena que no correspondía y que es la de cumplir la de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena y a una multa de un tercio (1/3) de unidad tributaria mensual, todo como autor del delito consumado de Hurto.

Para tal efecto, el Tribunal Oral consideró que su defendido no gozaba de irreprochable conducta anterior, ello al considerar las anotaciones que tenía como adolescente, siendo que, de haberla reconocido, debería haber bajado en uno o dos grados, dado que ya el tribunal había reconocido la atenuante 11 N° 9, lo que permitía como posible una condena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, todo lo cual constituye un error de derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Asimismo, al fijar una pena improcedente, vulneró lo estipulado en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente N° 20.084, que en su artículo 2° establece que, en todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos.



En la aplicación de la presente ley, las autoridades deben tener en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Por su parte, el artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución Política de la Republica señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

En el mismo sentido, el artículo 21.2 de las Reglas de Beijing establece que los registros de menores delincuentes no se pueden usar en procesos de adultos. Estas reglas son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.

Añade que los registros de menores delincuentes son de carácter estrictamente confidencial y no pueden ser consultados por terceros. Sólo tienen acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas. Y, por último, que los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente.

TERCERO: Que, no obstante lo señalado, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago estuvo por aplicar la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, elaborando un razonamiento en base a conductas típicamente relevantes cometidas por el acusado cuando era adolescente resaltando que podía ser objeto de reproche penal, siendo que se encuentra acreditado que su representado sí contaba con la atenuante del artículo 11 N° 6, siendo que muchos tribunales ya tienen zanjada esta discusión, pues consideran que las condenas de menores son faltas y no condenas.

En este mismo sentido de ideas, aduce el recurrente, el fallo le otorgó una pena sustitutiva, porque “No Tiene Antecedentes Penales” como adulto su defendido, lo que permite inferir un evidente error de



interpretación al considerar y al mismo tiempo no considerar su irreprochable conducta, lo que es ilógico.

Añade que, lo acontecido infringe también el principio de legalidad, en su vertiente de garantía penal, establecida en el artículo 19 N° 3 inciso séptimo de la Constitución Política de la República, que exige que la ley describa con precisión la pena que corresponda al hecho. Señala que la *lex stricta* como manifestación del principio de legalidad, impone un cierto grado de precisión de la ley penal y excluye la analogía *in malam partem*, como se ha hecho en la presente causa.

A lo ya expuesto, se suma la vulneración del artículo 66 del Código Penal, inciso tercero, que dispone: “siendo dos o más las circunstancias atenuantes sin que concurra ninguna agravante, podrá imponer la pena inferior en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias”, lo que no se cumplió.

CUARTO: Que, en cuanto a la influencia del error, se manifiesta en que su representado contaba con dos atenuantes, unas de ellas ya reconocida por el tribunal, que fue la atenuante 11 N°9, sumándose la desconocida de irreprochable conducta anterior, generándose la hipótesis de rebaja de la condena impuesta, la que quedaría en una pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, cuyo cumplimiento sería con la pena sustitutiva de Remisión Condicional de la misma, dado que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 4 de la ley 18216.

Por todo lo anterior, pide que esta Corte acoja el presente recurso por la causal invocada y que, conforme a lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, proceda el Tribunal de alzada a anular la sentencia, por concurrir el error señalado en los fundamentos del recurso y dicte, sin nueva audiencia -pero separadamente- la respectiva sentencia de reemplazo que se conforme a la ley y, en definitiva se condene a Miguel Ángel Stenger Ledesma en su calidad de autor de un delito consumado de Hurto, pero sólo a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, más la multa de 1/3 de unidad tributaria mensual (que se encuentra cumplida por el día de abono que se encuentra certificada por la jefa de causa del tribunal) y a la suspensión de cargos u oficios públicos durante el término que dure la condena.



QUINTO: Que, el recurso de nulidad reglado en el estatuto procesal penal ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una excepcionalísima decisión de reemplazo y, dada la causal elegida por el recurrente, esta importa necesariamente aceptar los hechos tal como han sido establecidos, sin cuestionar su construcción ni razonamientos valorativos, por lo que el reproche sólo se puede relacionar con aspectos de derecho.

SEXTO: Que, asimismo, este medio de impugnación es de carácter extraordinario y de derecho estricto, en que las infracciones alegadas deben ser de tal naturaleza que tengan la suficiencia para variar de manera trascendente lo decidido.

SÉPTIMO: Que, desde la óptica descrita en los dos motivos precedentes y de un atento examen de su recurso, aparece como un primer obstáculo insalvable, que las normas denunciadas como vulneradas, que son los artículos 1 y 4 de la Ley N° 18.216 y el inciso tercero del artículo 66 del texto penal, no tienen el defecto sustancial que aduce el recurrente, en atención a que respecto de la primera, se le dio correcta aplicación, al imponerse en lugar de una pena efectiva, la pena sustitutiva de Remisión Condicional de la sanción; en tanto, por la segunda, se establece el juego de minorantes y agravantes en relación a ilícitos cuya sanción sea un grado de una pena divisible, cuyo era precisamente el caso, dado el contexto fáctico inmodificable que tuvieron presente los jueces del fondo, con cuyas previsiones cumplieron a cabalidad.

Lo anterior, ya permite desestimar el recurso de marras.

OCTAVO: Que, por otro lado, la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, gira en torno a una errónea aplicación del derecho con efectos sustanciales de importancia en lo resolutivo del fallo, lo que tiene importancia en el presente caso, desde que aún en el caso de una posible segunda minorante, la posibilidad de rebaja no es perentoria, toda vez que ante ese escenario, de todas formas la ley les permitía a los jueces orales imponer la misma sanción que fue establecida en su sentencia, toda vez que esa rebaja es meramente facultativa.



NOVENO: Que, en efecto, no constituye una norma perentoria lo dispuesto en el artículo 66 del texto penal, en su inciso tercero, en donde expresa que: "...Siendo dos o más las circunstancias atenuantes sin que concorra ninguna agravante, podrá imponer la pena inferior, en uno o dos grados al mínimo de los señalados por la ley, según sea el número y entidad de dichas circunstancias...", toda vez que el uso de la expresión facultativa "podrá", demuestra que no opera a todo evento dicha rebaja, como sí ocurre en otros casos, como son, a manera ejemplar, el caso de la atenuante calificada del artículo 68 bis o el de la denominada eximente incompleta del artículo 73 del mismo texto. Lo anterior, demuestra la inexistencia de trascendentalidad del error denunciado en lo dispositivo del fallo.

DÉCIMO: Que, de acuerdo a lo razonado, el presente recurso de nulidad debe desecharse en todos sus extremos, al no existir el error denunciado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 373 y siguientes del Código Procesal Penal, se decide que:

Se **RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la defensa privada del sentenciado **MIGUEL ANGEL STENGER LEDESMA**, el que se dirigió en contra de la sentencia que se dictó el trece de marzo de dos mil veinticinco, dictada en el proceso rol único N° **2301395487-9**, interno del tribunal N° **14-2025**, emanada del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, la que en consecuencia **no es nula**.

Se **previene** que la Abogada Integrante Sra. Magaly Correa Farías, si bien concurre al rechazo del recurso de nulidad, lo es compartiendo los fundamentos del fallo que antecede, pero con excepción de lo expresado en sus motivos octavo y noveno.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M.

Rol N° 1603-2025 RPP.

Pronunciada por la **Octava Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, por la ministra señora Sandra Araya Naranjo y la Abogada Integrante señora Magaly Correa Farías.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCXCXUFZMXX



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCXCXUFZMXX

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Rivera M., Sandra Lorena Araya N. y Abogada Integrante Magaly Carolina Correa F. Santiago, dieciseis de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a dieciseis de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HCXCXUFZMXX